

RELATORÍA JURÍDICA
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Martes 4 de agosto de 2015

Entes tienen hasta junio 8 de 2016 para adoptar como contribución especial lo que era el impuesto de alumbrado público

Enertolima no obligada al pago del impuesto de alumbrado público en Girardot pues Acuerdo 015 de 2007 base, fue anulado: Consejo de Estado.

La Corporación confirmó la sentencia del 11 de junio de 2014 a través de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de los actos atacados y, como restablecimiento del derecho declaró que Enertolima SA ESP “no está obligada al pago al municipio de Girardot del impuesto de alumbrado público en las resoluciones anuladas. Lo anterior, por cuanto que se demostró que el sustento legal que invocó los actos aquí anulados lo es el Acuerdo Girardot 015 de 2007 el que fue anulado por el citado Tribunal en 21 de octubre del año 2010”.

La Sala precisó que el artículo 191 de la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018) prevé los sujetos pasivos, la autoridad encargada de determinar la metodología para la distribución del costo a recuperar y la base gravable de la contribución.

Es así que la citada Ley “sustituyó el impuesto de alumbrado público previsto en el literal d) del artículo 1 de la Ley 97 de 1913, para regularlo como una contribución especial”, por lo que la “sustitución” será aplicable a “las entidades territoriales que hayan expedido acuerdos adoptando el tributo de alumbrado público autorizado por la Ley 97 de 1913 para lo cual cuentan con un plazo de un (1) año a partir de la vigencia de la ley para que adopten la contribución en los términos dispuestos en esa norma (parágrafo transitorio)”.

Es de anotar que la Ley 1753 fue publicada en el Diario Oficial 49538 del 09 de junio de 2015. Consejo de Estado CE-SEC4-EXP2015-N21284 (00374-01) Nulidad-Restab 2015/07/02

Establecen alcances de la intervención de los padres en redes sociales de sus hijos

En ejercicio de la patria potestad, y siempre que el interés sea salvaguardar el deber de acompañamiento a sus hijos, los padres pueden tener acceso a la información que aquellos almacenen en sus cuentas redes sociales, aclaró la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, aclaró que para ser aportados al proceso penal los datos provenientes de una cuenta de correo electrónico, ello requiere de una orden previa del fiscal y un posterior control de legalidad por parte del juez, en cumplimiento de los artículos 233 y 236 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004).

En el caso concreto, donde la acudiente de la menor fue la que aportó estos elementos, la Sala concluyó que no se compromete el derecho a la intimidad del artículo 15 de la Constitución.

A su juicio, no era necesario tramitar el procedimiento descrito en el código para incorporar las pruebas así obtenidas, porque las condiciones de la cuenta de correo electrónico de donde surgieron los datos establecían que la acudiente era una de sus titulares.

Se trataba de un sitio asignado por la universidad donde estudiaba la víctima, al que debían tener acceso sus padres, para ser testigos del proceso académico; de allí surgieron los elementos tenidos en cuenta en esta providencia, que confirma una condena por acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir

(M. P. Patricia Salazar). (Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-9792 (42307), 7/29/2015) Noticia generada en Ago. 3/15 (1:50 p.m.)

Amparo de los ancianos se encuentra principalmente en cabeza de las familias

La familia juega un papel fundamental en el proceso de envejecimiento y constituye uno de los recursos más importantes de la población mayor, pues ofrece sentimientos de capacidad, utilidad, autoestima, confianza y apoyo social, siendo así la más idónea para proporcionar arraigo y seguridad a los ancianos, quienes, por naturaleza, padecen de problemas fisiológicos y patológicos.

Corte Constitucional Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil quince (2015) Sentencia T-127

Reiteran que hermanos están legitimados para reclamar perjuicios morales

El Consejo de Estado advirtió que aunque una persona conforme su propio hogar no por ello los lazos de afecto y solidaridad que sostenía con sus padres y hermanos dejan de existir, aún más “en familias como las nuestras, que son dadas a la cercanía y el contacto constante”, por lo cual no sería este un motivo para desestimar el derecho que les asiste a parientes cercanos.

Según lo reseñó la sentencia, a partir del 17 de julio de 1991, fecha en la que se diera el cambio de jurisprudencia al respecto, la presunción de dolor por la muerte de un ser querido se hizo extensiva a sus hermanos, pues es lo normal que alguien experimente aflicción ante el fallecimiento de un ser tan cercano, y en tal caso es a la parte demandada a quien corresponde desvirtuar esta presunción.

Así, desde aquella data, se presume que el daño antijurídico inferido a una persona, causado por la acción u omisión de las autoridades públicas genera dolor y aflicción entre sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, ya sean ascendientes, descendientes o colaterales, indicó

(C.P. Olga Mélida Valle). (Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 05001233100019970141701 (30855), 7/1/2015) Noticia generada en Ago. 3/15 (2:48 p.m.)

Garantías electorales para el 2015 - Qué se entiende por entidades descentralizadas

Colombia Compra Eficiente sustituyó integralmente su circular relacionada con la aplicación de la Ley de Garantías Electorales para el proceso electoral del año 2015.

Es pertinente indicar que en la Circular se menciona que para efectos de definir la aplicación del parágrafo del artículo 38 de la Ley de Garantías, las entidades descentralizadas deberán tener en cuenta la participación

que tienen las Entidades Estatales en su capital, en sus órganos de dirección y administración y la asignación de competencias o funciones de la respectiva entidad territorial en función del concepto de descentralización por servicios.

Ahora bien, las conclusiones de la Circular son las siguientes:

- No pueden celebrar convenios o contratos interadministrativos para ejecutar recursos públicos desde el 25 de junio de 2015 hasta el 25 de octubre de 2015.
- Pueden realizar cualquier otro Proceso de Contratación, incluyendo la contratación directa, siempre y cuando no implique celebrar convenios o contratos interadministrativos para la ejecución de recursos públicos.
- Las prórrogas, modificaciones o adiciones, y la cesión de convenios o contratos interadministrativos suscritos antes del período de restricción previsto por el parágrafo del artículo 38 de la Ley de Garantías están permitidas, siempre que tales prórrogas, modificaciones, adiciones y cesiones cumplan los principios de planeación, transparencia y responsabilidad. *Ver Texto de la Circular adjunta*

Nota: En lo que respecta a la descentralización funcional o por servicios, la Corte Constitucional ha indicado que tal tipología de descentralización, consiste en la asignación de competencias o funciones del Estado a ciertas entidades, que se crean para ejercer una actividad especializada, tales como los establecimientos públicos, las corporaciones autónomas regionales, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta. (Sentencia C-1051 de octubre 4 de 2001) *Ver Texto de la Sentencia C-1051 2001 adjunta*

La suspensión del contrato no puede carecer de términos

De otro modo, podría tratarse de su terminación anticipada, precisó el Consejo de Estado. La Sala resaltó que, en los términos del artículo 1º de la Ley 95 de 1890, la falta de apropiación presupuestal para cumplir las obligaciones económicas del contrato no constituye fuerza mayor, pues no se trata del imprevisible que ampara la norma para validar la reforma civil.

Esta circunstancia, precisó, significa “un comportamiento antijurídico e ilegal” de una de las partes, que deriva en el incumplimiento del contrato.

La Sala interpreta que la extinción de las obligaciones (artículo 1625 del Código Civil) por la falta de recursos, en este caso, constituyen una terminación anticipada del acuerdo contractual; lo que procedía era liquidar el contrato, para culminar el objeto contractual, sentenció

(C. P. Carlos Alberto Zambrano). (Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 88001233100020020014101 (31634), 7/16/2015) Noticia generada en Ago. 3/15 (3:14 p.m.)

En la etapa de indagación el presunto responsable puede no estar enterado de la investigación que se lleva en su contra

La accionante pierde de vista que en el sistema penal acusatorio, que actualmente rige en el Estado colombiano, en la indagación el fiscal busca si existe o no mérito para iniciar un proceso penal ante la posible ocurrencia de un delito y de allí que, por ejemplo, el presunto autor no esté vinculado a algún proceso penal e incluso es posible que ni siquiera tenga conocimiento de que se está adelantando una investigación.

Procuraduría General- Abril 06 de 2015- Concepto Jurídico 5898

Quejas temerarias e irrelevantes no dan lugar a la apertura de investigación disciplinaria

El alto tribunal, de conformidad con el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, parágrafo primero, recordó que cuando la queja sea manifiestamente temeraria o se refiera a hechos disciplinariamente irrelevantes o de imposible ocurrencia, o sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, el funcionario de plano se inhibirá de iniciar actuación alguna.

Adicionalmente, el fallo resaltó que la irrelevancia de los hechos en materia disciplinaria se refiere a las conductas que no estén calificadas como faltas disciplinarias, determinadas en el artículo 196 de la Ley 734 del 2002, como el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes.

La decisión inhibitoria, advirtió, no hace tránsito a cosa juzgada material, sino formal, por lo tanto el quejoso puede, antes de que

prescriba la acción, concretar la denuncia y aportar pruebas que permitan establecer la relevancia disciplinaria de los hechos denunciados

(M.P. Pedro Alonso Sanabria). (Consejo Superior de la Judicatura, Sentencia 11001110200020130743501, 4/8/2015) Noticia generada en Ago. 3/15 (8:08 a.m.)

Lunes 10 de agosto de 2015

Debate sobre la eutanasia

Supersalud imparte instrucciones sobre cumplimiento del derecho a morir dignamente

La Superintendencia de Salud expidió la circular externa que imparte instrucciones respecto del cumplimiento de la Sentencia T-970 del 2014 de la Corte Constitucional, en relación con la organización y funcionamiento de los comités para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad.

A las instituciones prestadoras de servicios de salud privadas, públicas y mixtas del Sistema General de Seguridad Social en Salud y pertenecientes a los regímenes especiales y de excepción les recuerda los aspectos que deberán ser considerados tanto por el médico tratante como por el comité interdisciplinario para hacer efectivo el derecho, tales como el diagnóstico del médico tratante, la solicitud de la persona mayor de edad, el consentimiento sustituto y la objeción de conciencia, entre otros.

En cuanto a las entidades promotoras de salud, les recuerda las funciones establecidas en el artículo 14 de la Resolución 1216 del 2015, que son de obligatorio cumplimiento, e hizo énfasis en las siguientes: no podrán interferir en la decisión tomada por el paciente o los legitimados, contar en su red prestadora de servicios con profesionales de la salud idóneos y suficientes para atender los requerimientos que puedan surgir y garantizar durante las diferentes fases, tanto al paciente como a su familia, la ayuda psicológica y médica necesaria.

Las entidades territoriales ejercerán la inspección y vigilancia de los prestadores de servicios de salud para que verifiquen el cumplimiento de las instrucciones impartidas. Así mismo, precisa a las vigiladas que estas pautas son solo enunciativas y en ningún momento se puede desconocer alguna otra orden, recomendación o parámetro establecido en la Resolución 1216 o que llegue a realizar cualquiera otra autoridad o

juez de la República al respecto. (Supersalud, Circular externa 0013, 7/27/2015) Noticia generada en Ago. 6/15 (10:22 a.m.)

Proyecto busca categorizar a Cali como distrito especial deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios

Según la parte motiva del proyecto, la finalidad es la categorizar al Municipio de Santiago de Cali como Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y De Servicios para que su régimen jurídico sea, una vez en firme la respectiva norma, el contenido en la ley 1617 de 2013 para los Distritos Especiales.

“Este objeto se cumple en los cuatro artículos propuestos; el primero de los cuales contiene el objeto del proyecto de ley, el segundo contempla la declaración de la voluntad del Congreso de categorizar a la ciudad de Cali como Distrito Especial, el tercero prevé que el régimen político, administrativo y fiscal que se le aplicará sea el de los Distritos Especiales (ley 1617 de 2013), y el cuarto fija la vigencia de la ley propuesta”.

Congreso de la Republica- PL-2015-N039S-Comision Primera- TO (CALI) 2015/08/05

Objeción presidencial a proyecto de ley que expide el Código general disciplinario y deroga la Ley 734 de 2002

“Sin la correspondiente sanción ejecutiva, el Gobierno nacional devuelve por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia el proyecto de ley de la referencia, el cual fue presentado al Congreso de la República por iniciativa del señor Defensor del Pueblo y el señor Procurador General de la Nación.

A. De las objeciones por inconstitucionalidad.

1. Violación del artículo 29 de la Constitución Política. Revisado el articulado del Proyecto de ley número 55 de 2014 Senado, 195 de 2014 Cámara, el Gobierno nacional objeta el artículo 67 por las siguientes razones de inconstitucionalidad: La disposición objetada establece: “Artículo 67. Faltas graves y leves. Constituye falta disciplinaria grave o leve, el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones, o la incursión en prohibiciones, salvo que la conducta esté prevista como falta gravísima. La gravedad o levedad de la falta se establecerá de conformidad con los criterios señalados en el artículo 47 de este código””.

Contratos: El proponente debe acogerse al tiempo que le otorga la administración para subsanar o aclarar la oferta

No se trata de que el oferente tenga la posibilidad de entregar la información solicitada a más tardar hasta la adjudicación; es la entidad quien tiene, a más tardar hasta la adjudicación, la posibilidad de pedir a los oferentes que aclaren o subsanen.

Metroseguridad (Medellín) abrió la licitación pública No. 002 de 1994, cuyo objeto fue el montaje, suministro e instalación de un sistema de video para vigilancia ciudadana, Participaron 4 proponentes: i) Tecnologías y Representaciones Ltda.; ii) Siemens Aktiengesellschaft (Siemens S.A.); iii) Meltec S.A.; y iv) CBA Ltda. La entidad, durante el término de evaluación de las ofertas y antes de publicar el informe respectivo, solicitó aclaraciones a varios proponentes para establecer el alcance de las ofertas. Las solicitudes fueron atendidas por los participantes.

En el informe de evaluación la entidad consideró que la propuesta de Siemens S.A. fue la única que cumplió los requisitos mínimos exigidos en el pliego de condiciones, y recomendó adjudicarle el contrato, lo cual hizo mediante la Resolución No. 140 de 1994, adicionada mediante la Resolución No. 149 del 28 de septiembre de 1994.

El demandante acudió a la Procuraduría Provincial de Medellín, el 12 de diciembre de 1994, dada su inconformidad con la decisión de la entidad, de manera que a partir de allí se entendió notificado del acto de adjudicación, por conducta concluyente. La demanda se presentó el 4 de mayo de 1995.

“Durante la vigencia de la Ley 80 -y con más claridad en vigencia de la Ley 1150 de 2007- las entidades estatales deben solicitar a los proponentes que aclaren, expliquen o subsanen los defectos de las propuestas. Esta oportunidad sólo puede realizarse, por razones obvias, a partir del momento en que empieza la etapa de evaluación -tan pronto se entregan las ofertas-, abarcando la etapa de análisis de las observaciones contra el informe de evaluación -que materialmente supone una evaluación final de las ofertas- e incluso -como límite- llega hasta la adjudicación.

Esto significa que la oportunidad para aclarar, explicar y subsanar las ofertas incluye varias etapas del proceso de selección. (...) No se trata, entonces, de que el oferente tenga la posibilidad de entregar la información solicitada a más tardar hasta la adjudicación; es la entidad quien tiene, a más tardar hasta la adjudicación, la posibilidad de pedir a los oferentes que aclaren o subsanen. De esta manera, el oferente requerido no puede controlar y menos manipular el proceso de selección reteniendo maliciosamente la información solicitada –por ejemplo, la póliza, la acreditación de experiencia adicional, la autorización para contratar, etc.- hasta cuando decida caprichosamente entregarla –sin exceder el día de la adjudicación”.

Consejo de Estado CE-SEC3-EXP2015-N31211 (00613-01) Contractual 2015/06/03

Contratos que se celebren sin licitación pública o contratación directa están viciados de nulidad absoluta

Industria de Licores del Valle autorizó a un particular mediante resoluciones, “mientras” se perfeccionaba un contrato, la venta de licores en el extranjero.

Entre la sociedad A. Romero Trading Corporation y la Industria de Licores del Valle surgió una relación para la venta de licores desde 1998. Las partes tuvieron acercamientos con el fin de llegar a un acuerdo que les permitiera celebrar un contrato de distribución, para lo cual la entidad solicitó a la demandante varios documentos para su celebración, la sociedad aportó varios documentos que no cumplían con las condiciones requeridas para firmar el contrato; sin embargo, la entidad estatal autorizó las ventas de licor mediante resolución, en la que explícitamente se hizo constar que era mientras se legalizaba el contrato de distribución y que tal resolución no implicaba contrato, ni relación prolongada en el tiempo y solo autorizaba las ventas por las cantidades allí anotadas.

Esa forma de venta se mantuvo hasta el 23 de junio de 2000, lapso en el cual se expidieron, por lo menos, 19 resoluciones autorizando las ventas bajo esas condiciones. En febrero de 1999, la sociedad A. Romero Trading Corporation presentó una propuesta a la Industria de Licores del Valle sobre la forma de contratación sin que llegaran a un acuerdo sobre el contrato de distribución de licores.

“En relación con el procedimiento de licitación pública, esta Sala ha dicho que el mismo “hace parte de la función administrativa que desarrollan las entidades del Estado y, como tal, constituye un procedimiento administrativo orientado por los mismos principios que regulan dicha actividad; así mismo, dicha norma legal, por contener y reglar un procedimiento, participa del carácter de orden público y de obligatorio cumplimiento, razón por la cual, (sic) la Administración está en el deber legal de acatar estrictamente sus mandatos, so pena de afectar la validez de la actuación y, por tanto, del acto de adjudicación e incluso del propio contrato”. Por su parte, la contratación directa, también sujeta al cumplimiento de requisitos y procedimientos específicos, era permitida para este caso específico por tratarse de una actividad que estaba íntimamente ligada con el objeto de la Industria de Licores del Valle.

Consejo de Estado CE-SEC3-EXP2015-N31683 (01009-01) Contractual 2015/07/16

Daños causados a comerciantes durante jornada de protesta son imputables a Barranquilla y no a la Policía Nacional

Daño que se produjo a locales durante manifestación es imputable al Distrito Especial, industrial y portuario de Barranquilla por ser su alcalde la primera autoridad policiva.

“El artículo 12 de la Ley 62 de 1993, que prevé que “(..) el gobernador y el alcalde son las primeras autoridades de policía en el departamento y municipio respectivamente”, a la vez que consagra el deber de dichos funcionarios para que diseñen y desarrollen planes y estrategias integrales de seguridad, atendiendo las necesidades y circunstancias que se presenten bajo su jurisdicción”.

Por lo tanto, La Corporación consideró procedente la impugnación realizada por el demandante, quien alegaba que el Distrito especial, industrial y portuario de Barranquilla sí estaba legitimado por pasiva para ser demandado por los daños que se produjeron durante una manifestación a varias propiedades y no la Policía Nacional, tesis que acogió La Sala ya que “Dado que se encontraba a cargo de la administración distrital tomar las medidas necesarias para que las protestas se desarrollaran en completa calma y normalidad, sin que se vieran afectados los derechos de los ciudadanos que no participaran en ellas, se considera que el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla sí se encuentra legitimado en la causa por pasiva y que,

además, los daños reclamados por los demandantes sí le son imputables”.

Consejo de Estado CE-SEC3-EXP2014-N34308 (00213-01) ARD-2014/11/13

SALA DE CONSULTA

Parque Bicentenario de Medellín: Sí pueden ser veedores personas que tienen interés directo en las obras

Los veedores ciudadanos trabajan en defensa de intereses colectivos que por lo general llevan inmersos sus intereses propios, y por tal razón, en los casos aquí analizados, la existencia de tales intereses propios no lleva a que se configure la causal de impedimento establecida en el literal a) artículo 19 de la Ley 850 de 2003.

Se solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil su concepto en relación con la existencia impedimentos para ser veedor ciudadano del proyecto denominado 'Parque Bicentenario' que adelanta la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU, del Municipio de Medellín, en adelante EDU, ubicado en las comunas 8 y 9, entre las calles 36 y 39, en un área de 24.444 metros cuadrados; concebido como el punto de partida para el parque lineal que se construirá a lo largo de la quebrada Santa Elena, como eje de recuperación ambiental y para cuya construcción se requiere la compra de 115 predios de comercio y de vivienda.

Los interrogantes específicos planteados a la Sala se pueden agrupar en los siguientes supuestos: i) ¿Existe impedimento por haber presentado acciones constitucionales (acciones populares, tutelas), relacionadas con el objeto de la vigilancia?; ii) ¿Existe impedimento para quienes se encuentran en el área de influencia del proyecto y en razón de su ejecución, puede darse la posibilidad de que se les afecte el valor del inmueble?; iii) ¿Existe impedimento para padres o herederos de propietarios de inmuebles, objeto de compra para el proyecto que se vigila?; iv) ¿Existe impedimento para arrendatarios de inmuebles destinados al ejercicio del comercio y que son objeto de compra para el proyecto que se vigila y quienes tendrían derecho a una prima de desmonte, traslado y posterior montaje de su negocio? Para responder a los interrogantes planteados la Sala de Consulta y Servicio Civil analizó la naturaleza jurídica, evolución y regulación legal de las veedurías ciudadanas.

Para la Sala, "incluso podría ser deseable que 'socialmente hablando' las veedurías tuvieran 'una tendencia parcializada', puesto que se trata de defender el patrimonio del Estado mediante la expresión de una preocupación individual por lo colectivo. En este sentido se pronunció la Corte Constitucional al analizar el artículo 21 del proyecto de la ley 850 de 2003 -hoy artículo 19-, haciendo énfasis en que las causales de impedimentos para los veedores deben aplicarse de manera taxativa y con una interpretación no muy rigurosa, pues no se trata de servidores públicos. Esta misma idea se plasmó en la exposición de motivos de la ley 850 de 2003, en la que se resalta que dentro de la preocupación colectiva va inmersa la privada cuando se afirma que el veedor actual deja de pensar 'única y exclusivamente en la solución de sus problemas, para actuar en beneficio de la comunidad'. La idea es que se trabaje por los intereses colectivos que llevan inmersos los intereses propios, no que se sustituyan los primeros por los últimos. Es de esta manera que la naturaleza de las veedurías puede definirse como colectiva".

Consejo de Estado CE-SC-RAD2015-N02052 (00012-00) Concepto 2015/06/21

Explican eventos en los cuales discusión sobre cesantías y sanción moratoria se ventila en la jurisdicción contencioso administrativa

La Sección Segunda del Consejo de Estado aclaró que la demanda que pretende la nulidad del acto administrativo que negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías es competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo; mientras que si existe acto administrativo de reconocimiento de la sanción moratoria, el conocimiento del proceso ejecutivo para hacer efectivo dicho pago será de la justicia ordinaria laboral.

Según lo explicó la providencia, desde el año 2007 se ha unificado la posición, de acuerdo con la cual, en los eventos en que se reconocen las cesantías oportunamente pero no las pagan; se reconocen oportunamente pero las pagan tardíamente; se reconocen extemporáneamente y no las pagan; se reconocen extemporáneamente y las pagan tardíamente, entre otros, la vía procesal adecuada para discutirlo es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo, cuando existe certeza del derecho y la sanción, la vía es el proceso ejecutivo laboral, porque hay título ejecutivo

(C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez). (Consejo de Estado Sección Cuarta, Auto 15001233300020130048002 (14472015), 7/16/2015) Noticia generada en Ago. 6/15 (4:39 p.m.)

El Estado no puede patrocinar actos que lesionen el sentimiento religioso: Procurador

Con esta declaración, el procurador Alejandro Ordóñez indicó que el Ministerio de Cultura no estaba legitimado para autorizar la exposición Mujeres Ocultas, en la que había representaciones de partes íntimas femeninas a través de símbolos católicos.

Así, pidió a la Corte Constitucional que prevenga a la cartera para que en el futuro se abstenga de promover tales manifestaciones. Al interpretar que se trataba de una agresión al sentimiento religioso, atentatoria contra la libertad de cultos, el jefe del Ministerio Público anotó que, por ser garante de los derechos fundamentales, al Estado le está vedado publicitar actos que desconozcan una de esas garantías, como a su juicio lo era esta exposición artística.

En su sentir, no se trata de un escenario de tensión entre el derecho a la libertad de cultos y la libre expresión de la artista expositora, María Eugenia Trujillo, como lo interpretó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sino que se impone determinar si se violan garantías fundamentales cuando las autoridades patrocinan manifestaciones artísticas.

Añadió que el derecho a la libertad de cultos no se satisface únicamente con la no intervención del Estado en favor de una u otra creencia, sino que requiere que este proteja su práctica, absteniéndose de volver a patrocinar actos que lastimen el sentimiento religioso. (Procuraduría General de la Nación, Documento (Intervención Exp. T-4.782.580), 7/29/2015)

Noticia generada en Ago. 6/15 (10:27 a.m.)

Prestación del servicio militar debería extenderse a mujeres, advierte demanda de inconstitucionalidad

La prestación del servicio militar obligatorio en Colombia únicamente por los hombres viola el derecho a la igualdad, asegura un escrito de inconstitucionalidad radicado contra una parte del artículo 10º de la Ley 48 de 1993.

Para el accionante, esa obligación también debería estar en cabeza de las mujeres mayores de edad, de manera que la norma demandada genera discriminación, al no dar el mismo trato a ambos sexos y disponer que el resolver la situación militar al cumplir los 18 años es voluntario para la mujer (demandante: Yamid Perdomo España). (Corte Constitucional, Demanda D-10858, 6/1/2015)

Noticia generada en Ago. 6/15 (8:05 a.m.)

Colombia corre el riesgo de perder valiosas especies maderables

“Según estimaciones del IDEAM, Colombia cuenta con 114 millones de hectáreas de extensión continental, de las cuales, alrededor de 55 millones están cubiertas por bosque natural, de igual forma se estima, que la producción de madera del país es de alrededor de 2.73 millones de metros cúbicos anuales, que procede en un 80% de bosques naturales y solo el 20% de las plantaciones. El IDEAM estima que desde el año 2008 la pérdida de cobertura boscosa está alrededor de las 10.000 hectáreas al año”.

MinAmbiente-Comunicado-2015-N0005767 2015/08/05

Jueves

Se adjunta el Boletín 169 del Consejo de Estado

Limitarían indemnizaciones por casos de responsabilidad estatal

Un proyecto de acto legislativo que reformaría el artículo 90 de la Constitución permitiría expedir una ley para establecer los eventos en que la responsabilidad del Estado esté limitada, excluida o condicionada.

Según el autor del proyecto, así se evitará la pérdida de recursos públicos por medio de demandas contra el Estado que en muchos casos son “desproporcionadas e injustas”. Aún en los casos en los cuales el daño producido por el Estado y sus agentes es real y la indemnización debe operar, la regulación que vía jurisprudencial se hace de las tipologías de daño y sus montos son en extremo onerosas y perjudiciales para las arcas públicas, se afirma en la propuesta.

(Cámara de Representantes, Proyecto de acto legislativo 058/15C, 8/5/2015) Noticia generada en Ago. 10/15 (3:15 p.m.)

Cédula de ciudadanía no opera como requisito sine qua non para la entrega de ayuda humanitaria

Aunque es cierto que la cédula de ciudadanía es el documento idóneo en nuestro ordenamiento jurídico para identificar a toda persona, también lo es que cuando la exigencia de su exhibición vulnere derechos fundamentales, las entidades deben implementar medidas que le permitan corroborar la identidad de la misma y no negar de plano su derecho.

Corte Constitucional Sentencia T-134 Bogotá D.C. veintisiete (27) de marzo de dos mil quince (2015)

Abogado que se apropia de dineros de ente público es responsable fiscal

El abogado que no entrega a la entidad pública mandante los dineros recaudados en virtud del mandato, sino que se los apropia como honorarios, sin autorización para ello, causa un detrimento patrimonial al Estado, lo que genera su responsabilidad fiscal.

Así lo determinó la Sección Primera del Consejo de Estado, al señalar que aunque se trate de una entidad estatal sometida al régimen privado en relación con sus actos, contratos y relaciones laborales, la Contraloría General de la Nación sí puede ejercer el control fiscal de sus recursos públicos.

Frente a la caducidad de la acción fiscal, el fallo recordó que esta no aplica en los casos en que los hechos generadores del detrimento estatal ocurrieron en vigencia de la Ley 42 de 1993.

Adicionalmente, la corporación reiteró la autonomía e independencia de dicho proceso frente a los de naturaleza penal y disciplinaria derivados de los mismos hechos, porque la naturaleza del fiscal no es sancionatoria, sino administrativa y resarcitoria

(C. P. María Claudia Rojas). (Consejo de Estado Sección Primera, Sentencia 15001233100020010057202, 6/4/2015) Noticia generada en Ago. 12/15 (12:03 p.m.)

Decretos reglamentarios únicos

Fijan reglas específicas para normas modificatorias de decretos reglamentarios únicos

El Ejecutivo acaba de modificar la directrices generales de técnica normativa fijadas en el título II de la parte I del libro II del Decreto 1081 del 2015, decreto único reglamentario del sector de la Presidencia de la República.

Según explica el Gobierno, dada su naturaleza, los decretos compilatorios deben ser actualizados continuamente, por lo que la metodología para la estructuración de las normas que lo adicionen, modifiquen o deroguen debe responder a un sistema que permita insertarlas dentro del esquema propio de aquellos. Entonces, indica que todo decreto reglamentario que se expida, a partir de la fecha, deberá incorporarse al decreto único reglamentario del sector al cual corresponda.

En aquellos casos en que las disposiciones pretendan incorporarse como normativa novedosa, se tratará de una adición y deberá indicar el lugar exacto en donde debe insertarse. En caso de que el decreto pretenda modificar normas específicas de una norma unificadora deberá indicarse con exactitud la que se está cambiando.

En cuanto a las derogatorias o la supresión de normas específicas, deberá indicarse con exactitud la normativa que se deroga. Igualmente, establece un plazo de un mes para que los ministerios y departamentos administrativos hagan ajustes en sus sitios web, en la sección de normativa, para que el decreto único de su sector aparezca como documento principal; en el documento del decreto único todas y cada una de las referencias a leyes, decretos u normas del sector deben contar con hipervínculos a normas específicas.

Por efecto de modificaciones, la entidad respectiva deberá agregar, a través de hipervínculos, referencia a todos los actos que adicionen, modifiquen o deroguen cualquiera de sus disposiciones; las decisiones judiciales que declaren la nulidad o la suspensión de apartes de la norma deberán ser incorporadas en ejercicio de la actualización.

Noticia generada en Ago. 10/15 (4:11 p.m.) (Presidencia de la República, Decreto 1609, 08/10/2015)

Recuerdan alcance de la desviación de poder como causal de anulación de actos administrativos

La Sección Segunda del Consejo de Estado explicó que la desviación de poder, al no encontrarse definida por la ley, ha sido desarrollada por la doctrina y la jurisprudencia.

De esta forma, recordó que la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que esta causal de anulación de los actos administrativos afecta la finalidad del acto, bajo el entendido que el fin que persigue configura un requisito que debe hallarse en el marco de la función administrativa y del ordenamiento jurídico.

Así, indicó que se reconoce cuando se está ante la presencia de una intención particular, personal o arbitraria de un sujeto que actúa a nombre de la administración, pero en la búsqueda de un fin opuesto a las normas a las que debe someterse aunque en apariencia el acto parezca inobjetable, porque a simple vista no se vislumbra violación primaria de la ley al reunir las formalidades propias que le son exigibles

(C.P. Sandra Lisset Ibarra) Noticia generada en Ago. 11/15 (8:42 a.m.)
(Consejo de Estado Sección Segunda, Sentencia 250004200020120026101 (05962014), 7/9/2015)

Reiteran que EPS e IPS no son sujetos pasivos del ICA

El Consejo de Estado recordó que a partir de la Ley 14 de 1983 surgió este beneficio fiscal para las entidades públicas o privadas del sector salud, el cual se mantuvo con la Ley 100 de 1993.

Por tal motivo, la actividad comercial o de servicios de las entidades prestadoras de salud (EPS) no puede dar lugar al hecho generador del impuesto de industria y comercio, pues compromete recursos de la unidad de pago por capitación (UPC), la cual en razón de su carácter parafiscal no constituye ingresos propios de estas entidades, quedando, en consecuencia, excluidos de todo gravamen.

De ese modo, indicó, únicamente habría lugar a aplicar el aludido impuesto sobre la actividad comercial y de servicios de las EPS que comprometen recursos que excedan los destinados exclusivamente para prestación del POS, pues son ingresos propios sobre los cuales puede recaer el impuesto.

Finalmente, advirtió que tales reglas deben hacerse extensivas a las instituciones prestadoras de salud (IPS) (C.P. Hugo Fernando Bastidas). (Consejo de Estado Sección Cuarta, Sentencia 05001233100020050707601 (19904), 7/23/2015) Noticia generada en Ago. 11/15 (8:18 a.m.)

Destrucción del bien no exonera al locatario del pago de los cánones

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia recordó que el contrato de leasing es atípico, pues aunque sí se le ha dado un nomen iuris, su morfología jurídica no ha sido definida y precisada en la ley. Además, la atipicidad del negocio no se desvirtúa, a pesar de que en él confluyan elementos de varios contratos nominados, es decir, la interacción de estos no convierte, en forma automática, el nuevo acto en típico, precisó.

Por esto, sus estipulaciones deben ser examinadas según las reglas de interpretación de los negocios jurídicos, con el fin de averiguar la intención real de sus autores. Frente al leasing financiero, la corporación aseguró que la destrucción del objeto no exonera al locatario del deber de pagar los cánones, aun cuando medie la existencia de un seguro, especialmente teniendo en cuenta que dicho pago no se limita a la contraprestación por el goce de aquel, ya que, a la vez, implica atender una obligación financiera.

De acuerdo con el fallo, el objeto del seguro no es garantizar el cumplimiento de las obligaciones por parte del usuario, sino proteger el interés asegurable que recae sobre el bien. Así mismo, en este caso, no es viable aplicar analógicamente las normas del arrendamiento relacionadas con la expiración del convenio, resaltó la sentencia (M. P. Margarita Cabello). (Corte Suprema de Justicia Sala Civil, Sentencia SC-11001310303920090016101 (94462015), 7/22/2015) Noticia generada en Ago. 11/15

Corte Constitucional establece parámetros para que participantes de concursos regulados por la CNSC puedan contrastar respuestas

La Corte Constitucional concluyó que la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) debe permitir que los participantes en concursos de méritos a su cargo puedan contrastar la contestación a los respectivos

exámenes con las respuestas correctas de las pruebas, pero sin afectar la cadena de custodia.

Así, indicó, la entidad debe diseñar un procedimiento en el que participen funcionarios de la entidad responsable del concurso, para que únicamente el participante pueda conocer su contenido. Recordó que las pruebas son reservadas, al tenor de los artículos 31 de la Ley 909 del 2004 y 34.4 del Decreto Ley 765 del 2005, excepto para las personas autorizadas por la CNSC, en curso del trámite de reclamación

(M. P. Jorge Iván Palacio). (Corte Constitucional, Sentencia T-180, 4/16/2015) Noticia generada en Ago. 12/15 (8:15 a.m.)

CNSC ajusta procedimiento para procesos de reclamación y acceso a pruebas de concursos de méritos

En cumplimiento de la Sentencia T-180 de la Corte Constitucional, la Comisión Nacional de Servicio Civil (CNSC) informará a los aspirantes, con antelación no inferior a cinco días hábiles, a través de sitio web y de la universidad o institución universitaria o de educación superior contratada, la fecha en que serán publicados los resultados de las pruebas aplicadas en el concurso de méritos.

Igualmente, se señala que el plazo para realizar reclamaciones es de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de los resultados. Dentro de la oportunidad para las reclamaciones, los aspirantes que manifiesten la necesidad de acceder a las pruebas presentadas lo harán a través de un aplicativo.

El aspirante solo podrá acceder personalmente a la prueba sin que tenga acceso a otras u hojas de respuestas de otros. De igual manera, deberá realizarse ante un funcionario competente que garantice el registro de la cadena de custodia y en ningún caso se podrá autorizar su reproducción física o digital.

Por último, advierte que este procedimiento aplica tanto para las convocatorias en curso como para aquellas que se adopten con posterioridad. Noticia generada en Ago. 12/15 (8:00 a.m.) (Comisión Nacional del Servicio Civil, Acuerdo 0545, 08/12/2015)

Desconocer directrices para difusión de información de la Registraduría podría conducir a insubsistencia

El Consejo de Estado concluyó que si los registradores especiales pertenecen al régimen de libre nombramiento y remoción, en los términos del artículo 3º (literal a) del numeral 8º) del Decreto Ley 1014 del 2000, en casos como este, se habilita el poder discrecional que ameritaría su desvinculación, que no requiere de motivación.

Lo anterior porque la naturaleza del cargo exige confianza, que se ve quebrantada con el desconocimiento de estas directrices, consagradas en el Decreto Ley 1010 del 2000.

El artículo 8º (numerales 7º y 9º) indican que son funciones de la oficina de prensa establecer las relaciones con los medios de comunicación y canalizar la información de la Registraduría, por lo que la Sala considera que las declaraciones ante los medios no autorizadas que haga un funcionario de libre nombramiento y remoción como este pueden quebrantar la razón de su vinculación (C. P. Gustavo Gómez).

(Consejo de Estado Sección Segunda, Sentencia 44001233300020130002301 (14712014), 6/24/2015) Noticia generada en Ago. 11/15 (8:49 a.m.)

Miércoles 19 de agosto de 2015

Daño moral también exige ser probado

Así lo sostuvo el Consejo de Estado al negar la reparación de un daño moral que se predicaba de la nulidad de la adjudicación de un bien adquirido en un remate.

La Sección Tercera recordó que el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil impone que sean las partes quienes prueben que los efectos jurídicos que persiguen se acojan al supuesto de hecho de las normas.

Dado que el demandante no aportó pruebas tendientes a demostrar la ocurrencia de un daño moral, la Sala considera que el cálculo del daño material establecido por la jurisdicción civil para reparar las consecuencias de la anulación de la adjudicación son suficientes para atender el deber resarcitorio

(C. P. Hernán Andrade). (Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 25000232600020030032001 (28389), 7/16/2015) Noticia generada en Ago. 18/15 (9:37 a.m.)

Entidades no pueden negar derecho a pensión por falta de copias auténticas

La Corte Constitucional indicó que a las entidades les está prohibido exigir copia auténtica o simple de los documentos que reposan en sus archivos y recordó cómo la jurisprudencia ha avanzado en el reconocimiento probatorio de documentos aportados en ambas modalidades.

Indicó que el artículo 90 del Decreto 19 del 2012 eliminó el deber de presentar copia de los documentos que reposen en los archivos de las entidades y que la Ley Estatutaria 1712 del 2014 obliga a la facilitación de acceso a la información, dejando de lado la exigencia de trámites que la obstaculicen.

Al tiempo, resaltó el valor de los artículos 244 y 252 del Código General del Proceso, y del 215 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, Ley 1437 del 2011), en los que se destaca la presunción de autenticidad de las copias simples.

Finalmente, el Consejo de Estado y la propia Corte Constitucional coincidieron en sus posturas al concluir que el propósito del legislador era equiparar el valor probatorio de las copias simples y las auténticas.

Si de la inaplicabilidad de estos principios se deriva la negativa del otorgamiento de un derecho pensional, sentenció, termina conculcándose el derecho fundamental al mínimo vital (M. P. Gloria Stella Delgado). (Corte Constitucional, Sentencia T-398, 6/30/2015)Noticia generada en Ago. 14/15 (3:30 p.m.)

Muerte fue por estado avanzado de enfermedad

Dado que se acreditó atención diligente a menor fallecido, no hubo falla del servicio médico del Hospital Militar

La Sala observó "que todo el material probatorio obrante en el proceso, consistente en la historia clínica del paciente, el acta de junta médica realizada por especialistas, remitido por el Instituto de Medicina Legal y

los testimonios obrantes en el proceso, se encuentra encaminado a acreditar que el personal del Hospital Militar Central, obró con diligencia y apego a la lex artis, tal como lo establecen las distintas juntas médicas que se realizaron sobre este caso, y como se puede observar en la historia clínica del paciente, que está compuesta por un registro pormenorizado de revisiones por parte de los médicos especialistas, control de medicamentos, notas de enfermería, registro de evolución y exámenes, que dan cuenta de una atención constante y diligente por parte del personal médico”.

La Sala colige que no hay lugar a conceder las pretensiones de la demanda, pues en primer lugar, la falla no fue debidamente acreditada, y por el contrario, con el material probatorio obrante en el proceso, fue posible establecer la idoneidad del tratamiento brindado al menor Edward, y para la Sala, resulta válido afirmar, que la muerte del menor sobrevino como consecuencia de la evolución normal de su enfermedad, la cual desde su ingreso al Hospital Militar Central, se encontraba en estado crónico terminal.

Consejo de Estado CE-SEC3-EXP2015-N32426 (11384-01) ARD-2015/01/28

Por falta de pruebas, no hubo falla del servicio médico en recién nacido quien en incubadora generó ceguera permanente

Los familiares del recién nacido demandaron al ISS por reparación directa por errores graves en la atención médica al menor, los cuales le causaron ceguera de por vida.

El Tribunal no accedió a las súplicas de la demanda. Señaló se encontraba acreditado que las retinas del menor no fueron quemadas y, aunado a ello, precisó que debido a la prematurez y el bajo peso del recién nacido se le había diagnosticado “retinopatía de la prematurez”.

Afirmó el Tribunal que si bien en la demanda se había narrado que la sobreexposición al recién nacido a altas concentraciones de oxígeno constituyó la causa de su ceguera, lo cierto es que las versiones de los especialistas en oftalmología que obran dentro del caudal probatorio determinaron que la retina del menor de edad no presentaba quemaduras y, aunado a lo cual, arguyeron que las causas de la ceguera del menor se atribuían a su condición de prematuro y a su bajo peso al momento del nacimiento.

Para la Sala, "al no haberse acreditado la imputación del daño antijurídico al Estado, resulta claro que no se configuró uno de los elementos estructurantes exigidos para comprometer la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y, en consecuencia, esta Subsección confirmará la sentencia apelada para, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda".

Consejo de Estado CE-SEC3-EXP2015-N34156 (01041-01) ARD-2015/04/15

Entidades territoriales deben verificar y controlar el cobro y pago de servicios sin cobertura en el POS

De acuerdo con lo previsto en la Resolución 1479 del 2015 e, inclusive, en normas anteriores, las entidades territoriales tienen el deber de implementar procesos de auditoría en su carácter de compradores de servicios de salud para la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, con el fin de verificar y controlar, entre otros aspectos, que los mismos no estaban cubiertos por el plan obligatorio para la fecha de su prestación y que, por lo tanto, el pago sí correspondía a la entidad territorial, indicó el Ministerio de Salud.

La disposición mencionada fija el procedimiento para el cobro y pago por parte de los entes territoriales, departamentales y distritales a los prestadores de servicios de salud, por los servicios y tecnologías sin cobertura en el POS, provistas a los afiliados al régimen subsidiado, autorizadas por los comités técnicos científicos u ordenados mediante providencias judiciales como la tutela.

(Minsalud, Concepto 201511601162241, 7/7/2015) Noticia generada en Ago. 18/15 (3:55 p.m.)

Reconocimiento del incentivo económico es improcedente aún en los iniciados antes de expedirse la Ley 1425 de 2010

Para la Corporación es claro que la Ley 1425 de 2010 es aplicable a aquellos procesos que se adelantan con posterioridad a su puesta en vigor, el cuestionamiento se dirige a aquellas acciones que iniciaron antes de dicho momento, pero que se resuelven con posterioridad.

Para dilucidar tal situación, la Sala considera necesario hacer referencia a la noción de derecho adquirido, que, con fundamento en el artículo 58 de la Constitución Política, modificado por el artículo 1 del Acto

Legislativo 01 de 1999, goza de protección constitucional... Era una posibilidad a la que se veía avocado el actor o promotor de la acción, sujeta a varios condicionamientos, que solo eran verificables al momento de la sentencia, tales como la prosperidad de la protección incoada y la valoración del Juez frente a la conducta desplegada.

Por lo anterior, no es dable considerar que al momento de presentarse la demanda el interesado tenía un derecho adquirido a devengar el incentivo, ello era apenas una mera expectativa.

Así, en la medida en que solo se consolida al momento de proferirse la decisión definitiva, puede ser objeto de modificación o incluso derogatoria en el transcurso del proceso... En estos términos, se advierte que la derogatoria del incentivo económico promovida por la Ley 1425 de 2010 afecta a los asuntos que no alcanzaron a decidirse de manera definitiva con anterioridad a su entrada en vigencia, esto es, el 29 de diciembre de 2010.

Consejo de Estado CE-SEC2-EXP2015-N00082-01 AP- 2015/03/12

Recuerdan carácter preventivo de la acción popular para evitar un daño ambiental

Para declarar la procedencia de la acción popular encaminada a la protección ambiental no es necesario que existan pruebas sobre un daño cierto, dado el carácter preventivo de aquella, que busca evitar la consumación de un riesgo o peligro contingente de mayor entidad, afirmó la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Al respecto, la expedición de la licencia ambiental ha sido prevista para precaver la realización de posibles daños, inminentes e irreparables, por lo que es imperioso que ella cuente con el previo estudio del impacto al ambiente, sin que esto haga innecesario el posterior control y supervisión de la actividad, lo cual se requiere para prevenir un perjuicio irreversible, indicó el fallo.

En el caso concreto, corroboró la violación de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la moralidad administrativa, el patrimonio público y la preservación y restauración del medio ambiente, porque una empresa explotó minerales de construcción y adelantó obras en el cauce del río Magdalena, en una vereda del municipio de Ricaurte (Cundinamarca), sin tener autorización y, además, no reportó las regalías correspondientes.

Como las autoridades competentes permitieron que la infracción continuara y pareciera legal, estas también quedaron obligadas a rendir un plan de acción tendiente a resolver la situación y conformar un comité de verificación del cumplimiento de la providencia y de dicho plan

(C. P. Stella Conto). Noticia generada en Ago. 13/15 (3:25 p.m.) (Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 25307333170120100021701, 4/29/2015)

Subsanabilidad de la oferta es regla excepcional: Consejo de Estado

La corporación determinó que la subsanabilidad no puede convertirse en la regla general, pues únicamente atenderá los eventos en que las propuestas presentan errores, falencias o vicios, los cuales pueden ser consecuencia de pliegos ambiguos, poco claros o que no atienden a criterios objetivos o a falta de cuidado del proponente en la confección de su ofrecimiento.

Sobre la figura, la Sala recordó que se entiende como una carga inherente a la administración, dentro de su deber de verificación del cumplimiento de las exigencias y requisitos efectuados en el pliego por parte de la entidad pública y se convierte indefectiblemente en un derecho del proponente, derivado del artículo 209 de la Constitución Política.

De ese modo, agregó, si las entidades contratantes no conceden a los proponentes la oportunidad de corregir la oferta dudosa o que no se comprende, en aquellos aspectos susceptibles de corregirse, violan el derecho del oferente a hacerlo, e incumplirían la obligación que les asigna la ley. Su desconocimiento daría la posibilidad al oferente de acudir ante la jurisdicción para exigir su cumplimiento, concluyó

(C.P. Jaime Santofimio). (Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 25000233100020050117801 (40660), 7/29/2015) Noticia generada en Ago. 14/15 (8:08 a.m.)

En la contratación directa debe cumplirse con el principio de la selección objetiva

En la contratación directa siempre debe mediar un trámite administrativo que evidencie que se ha efectuado un análisis de factores previos y determinantes a la contratación sobre conveniencia, oportunidad, capacidad, idoneidad, experiencia etc, ya que el hecho de que la contratación pueda ser directa, no implica de manera alguna obrar con arbitrariedad en la selección del contratista.

Conforme lo anterior, si no se evidencia el análisis anteriormente mencionado, se quebranta el principio de selección objetiva, generando la nulidad absoluta del contrato.

En este sentido, se pronunció el Consejo de Estado, reiterando la jurisprudencia en lo que refiere a la nulidad absoluta o relativa del contrato estatal y sus diferencias, indicando que la nulidad relativa, está principalmente consagrada en interés particular, por corresponder a vicios que afectan concretamente a una de las partes, caso en el cual deben ser alegados por el afectado para que proceda su declaración y son susceptibles de saneamiento.

Por su parte, la nulidad absoluta está consagrada en interés general y corresponde a aquellos eventos en los que el desconocimiento de tales formalidades y requisitos configura una seria vulneración del ordenamiento jurídico y reviste una gravedad tal, que el vicio resulta insaneable por ratificación y puede ser declarada de oficio por el juez.

Consejo de estado- Sala de lo contencioso administrativo- Sección Tercera Sentencia 30691 de 2015

Subsanabilidad de las propuestas - la capacidad jurídica del representante de una sociedad

La no acreditación al inicio del proceso de las autorizaciones que se requieran para comprometer a una sociedad hasta por determinada cuantía, es subsanable, siempre que el proponente hubiere contado con la capacidad jurídica para la presentación de la oferta.

En este sentido se pronunció el Consejo de Estado en reciente providencia, aclarando que una cosa es la ausencia de capacidad jurídica del representante legal de una sociedad para presentar una determinada propuesta, caso en el cual no habrá lugar a la subsanabilidad de este

defecto por cuanto constituye un requisito habilitante del oferente, y otra cosa, es que el representante legal, presente limitación en el monto para comprometer a su representada, caso en el cual la autorización dada por el órgano social competente, es prueba suficiente para que se comprometa a la sociedad, situación que puede ser ratificada en el término que indique la entidad estatal contratante, pero antes de la suscripción del contrato.

Para arribar a tal conclusión, se realizó un análisis de la secuencia jurisprudencial sobre la subsanabilidad de las propuestas y la capacidad de jurídica del representante legal de una sociedad.

En todo caso, en lo que respecta a la subsanabilidad de las propuestas, se menciona que el Consejo de Estado para resolver el caso, tuvo en cuenta las siguientes reglas y subreglas:

“A. Reglas generales:

1. La subsanación de las ofertas por parte de un proponente, se encuentra circunscrita o limitada a la posibilidad que tiene un proponente de remediar un defecto o error de su propuesta, siendo por lo tanto incorrecto entender que esta facultad le confiere a este, el derecho de aportar nuevos documentos que modifiquen o mejoren la oferta inicial.
2. La estructuración de las propuestas es una carga del interesado, lo que quiere decir que toda propuesta debe hacerse con base en los pliegos de condiciones elaborados por la entidad, quien también tiene la carga de que el contenido de los mismos, se fundamente en reglas objetivas claras y justas que conduzcan a ofrecimientos de la misma índole en el escenario del proceso de selección.
3. La subsanabilidad no puede convertirse en la regla general, si no por el contrario debe ser considerada de tipo excepcional, de allí que la confección de los pliegos de condiciones revista suma importancia en el señalamiento de criterios técnicos, financieros y jurídicos, que permitan realizar una comparación objetiva de las propuestas.
4. La subsanabilidad es una carga inherente a la administración, en el contexto del deber de verificación del cumplimiento de las exigencias y requisitos efectuados en el pliego por parte de la entidad pública y se convierte indefectiblemente en un derecho del proponente.

5. La posibilidad de corregir los errores de la oferta ante la entidad estatal al ser un derecho, es de obligatorio cumplimiento para la administración, razón por la cual su desconocimiento dará la posibilidad al oferente de acudir ante la jurisdicción para exigir su cumplimiento. Es decir, que la inactividad de la administración no debe afectar al oferente, por el contrario, ante el silencio de la entidad se entenderá que el defecto queda subsanado de acuerdo con la ley, por lo que no podrá aducirse la carencia de dicho requisito como fundamento del rechazo o descalificación de la propuesta.

B. Subreglas:

1. La no acreditación al inicio del proceso de las autorizaciones que de conformidad con los estatutos sociales se requieran para comprometer hasta por determinada cuantía a la persona jurídica, según el certificado de existencia y representación, será subsanable, siempre que el proponente hubiere contado con la capacidad jurídica para la presentación de la oferta.

2. Una cosa es la ausencia de capacidad jurídica del representante legal de una sociedad para presentar una determinada propuesta, caso en el cual no habrá lugar a la subsanabilidad de este defecto por cuanto constituye un requisito habilitante del oferente, y otra cosa, es que el representante legal, que se encuentra en ejecución de un contrato de mandato presente limitación en el monto para comprometer a su representada, caso en el cual la autorización dada por el órgano social competente, es prueba suficiente para que se comprometa a la sociedad, situación que puede ser ratificada en el término que indique la administración pero antes de la suscripción del contrato.”

Lunes 24 de agosto de 2015

Aseguradoras solo cubrían el daño emergente

Unificación de jurisprudencia: Acrecimiento del lucro cesante, y la no repetición contra empleado víctima de los hechos

La acción de reparación directa procede cuando los servidores públicos, en calidad de víctimas, demandan la reparación integral de los daños causados en el desempeño de sus funciones, tal como sucedió en el caso en estudio: Consejo de Estado.

La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con esta decisión que en apelación resuelve, unifica jurisprudencia “en lo relativo al acrecimiento de los perjuicios por el lucro cesante, a que tienen derecho quienes, debido a la solidez del grupo y el deber ser del buen padre de familia, amén de que dejaron de percibir la ayuda económica de la persona por cuyo fallecimiento se demanda la responsabilidad patrimonial del Estado, habrían asistido a no ver menguado el apoyo sino robustecido, culminada la necesidad de cada uno de los integrantes del núcleo familiar”.

Dijo la Sala que “el servidor público perjudicado en el ámbito de la relación laboral bien puede acudir ante el juez de la reparación, y no al juez del trabajo, para que se resuelva la responsabilidad del Estado, más allá de las prestaciones directamente derivadas de la relación laboral. De otro lado, indicó que el Departamento de Santander es responsable directo del accidente “porque sucedió en el ámbito de la peligrosa actividad de conducción de vehículos automotores ejercida bajo su dirección y control. Aunque los daños no provengan de una falla atribuible a la administración, precisamente porque el hecho consistió en la concreción del riesgo propio (caso fortuito), no extraño a la misma (fuerza mayor)”.

Por lo anterior, la sala confirma la sentencia que declaró responsable a la entidad y absolvió al conductor del vehículo llamado en garantía. Respecto de las compañías aseguradoras que el departamento llamó en garantía, dijo la Sala, que tampoco serán obligada a responder, pues por mandato legal (artículo 1088 del Código de Comercio), “los amparos de responsabilidad civil extracontractual que dieron lugar a su vinculación cubren únicamente el daño emergente, salvo disposición contractual en contrario, que en este caso no se dio. Y, como ya se dijo, el perjuicio cubierto no se probó”. Al ser condenado el Departamento, éste no podrá repetir contra los llamados en garantía. Consejo de Estado CE-SEC3-EXP2015-N19146 (03838-01) ARD- 2015/04/22

Mandamiento de pago de título ejecutivo derivado de un contrato estatal

Cuando se pretenda la ejecución de títulos derivados del contrato Estatal, de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales, el término para solicitar su ejecución es de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida.

En este sentido se pronunció el Consejo de Estado en un caso en el cual se computó el término de caducidad a partir del cumplimiento del plazo pactado para la ejecución de las obras.

Renovación de contratos con ARS para prestar servicio de salud del régimen subsidiado no es absoluta

La Ley 100 de 1993 permitió a las entidades territoriales celebrar convenios interadministrativos para administrar la prestación del servicio de salud propio del régimen subsidiado.

En ese sentido, el Consejo de Estado indicó que dichos entes están obligados a suscribir los contratos con las ARS, siempre y cuando estas se encuentren habilitadas por la Superintendencia de Salud; seleccionadas por el entonces Ministerio de Protección Social para operar en la región determinada; elegidas libremente por los beneficiarios del subsidio durante el proceso de afiliación o traslado, y cumplan con el porcentaje mínimo de participación en cada municipio para su selección en el concurso; entre otras condiciones fijadas en el Acuerdo 244 del 2003, expedido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.

Bajo este marco, la corporación precisó que la renovación obligatoria del contrato no es absoluta, porque las entidades territoriales deben verificar previamente la calidad del servicio prestado por las ARS y el cumplimiento de las obligaciones por parte de estas en cada periodo de contratación.

En consecuencia, la revocatoria del certificado de funcionamiento de la ARS sí autoriza al municipio o distrito para no renovar dichos contratos y adoptar las medidas legales tendientes a garantizar el servicio a la comunidad (C. P. Jaime Santofimio). Noticia generada en Ago. 24/15 (8:00 a.m.) (Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 73001233100020050082801 (41235), 7/29/2015)

Sergio Urrego sí tiene derecho a protección al buen nombre, intimidad e igualdad

Así lo sostuvo la Corte Constitucional, al determinar que las personas que han fallecido siguen manteniendo una garantía para la protección de sus derechos fundamentales; de ahí que, aún fallecido, la Sala haya concedido el amparo sobre Sergio Urrego, por considerar que el colegio en el que estudiaba sí violó sus derechos al debido proceso, al buen

nombre, a la igualdad y a la intimidad, por el proceso sancionatorio que se siguió en su contra, al descubrirse la relación que mantenía con otro de sus compañeros.

La Corte también hizo un llamado para que los manuales de convivencia se acojan a parámetros constitucionales, que promueven el respeto por la identidad y la diversidad sexuales, al punto de que no restrinjan las libertades que deben tener los alumnos.

A su juicio, la identificación con determinado género o sexo debe respetarse como un signo de la autonomía y la identificación personal. Además, consideró que la violación al derecho al buen nombre del estudiante se extendió a su familia.

(Corte Constitucional, Sentencia T-748/15, 08/21/2015) Noticia generada en Ago. 21/15 (3:05 p.m.)

Modifican norma que regula pago y compensación de cuotas partes pensionales con recursos disponibles en Fonpet

El Gobierno acaba de modificar el artículo 2º del Decreto 2191 del 2013, que reglamentan el pago y compensación de las cuotas partes pensionales con recursos disponibles en el Fonpet.

Dicho cambio es para permitir a las entidades territoriales incluir dentro del acuerdo de pago las obligaciones generadas por concepto de cuotas partes pensionales, que por efecto de la interrupción en su prescripción están vigentes, con el fin de que sean pagadas con los recursos disponibles en el fondo. (Minhacienda, Decreto 1658, 08/21/2015)
Noticia generada en Ago. 21/15 (3:55 p.m.)

Decretos reglamentarios únicos

Regulan seguridad social para educadores afiliados a Fondo de prestaciones sociales del magisterio

Para regular el artículo 21 de la Ley 1562 del 2012, el Ejecutivo acaba de modificar el Decreto 1075 del 2015, único reglamentario del sector Educación.

Así las cosas, adicionó el Capítulo III en el Título IV, Parte IV, Libro II, donde establece los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, la vigilancia epidemiológica, los comités paritarios de seguridad,

las actividades de promoción y prevención, la tabla de enfermedades laborales y el manual calificación pérdida de capacidad laboral para los educadores afiliados al Fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio. (Mineducación, Decreto 1655, 8/20/2015) Noticia generada en Ago. 24/15 (8:10 a.m.)

Abogados no deben caer en provocaciones que puedan afectar su rol ante la sociedad

El disciplinado debe recordar que él es un profesional del derecho y que por la importancia de su rol en la sociedad y en la Administración de Justicia, no puede agredir físicamente a sus contrapartes, ni ser protagonista de hechos bochornosos o incidentes.

Sus deberes profesionales deben ser aceptados de forma estricta, sin importar ser objeto de provocaciones o insultos, él más que nadie sabe que el ordenamiento jurídico tiene herramientas para enfrentar ese tipo de afrentas.

Consejo Superior de la Judicatura SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA- Magistrada Ponente: Doctora MARÍA MERCEDES LÓPEZ MORA- Bogotá D.C., Veintidós (22) de Abril de Dos Mil Quince (2015)- Radicado 050011102000201102944-01

Abren convocatoria para concurso de méritos en Procuraduría

El Ministerio Público proveerá 739 cargos de carrera a nivel nacional, en un proceso que será operado por la Universidad de Antioquia. Se trata de un cargo para el nivel ejecutivo, 52 para el asesor, 208 en el nivel profesional, 379 en el técnico, uno más para el administrativo y los 98 restantes para el nivel operativo.

Entre el 14 y 18 de septiembre próximos se adelantarán las inscripciones. Para mayor información consulte el sitio www.concursoempleosdecarreraupgn.org.co y www.procuraduria.gov.co. (Procuraduría General de la Nación, Comunicado, 08/21/2015)

Noticia generada en Ago. 21/15 (4:02 p.m.)

Advierten a Procuraduría que no puede negarse a suministrar información con base en normas sublegales

El Consejo de Estado determinó que la Procuraduría no podía negarse a suministrar información sobre ciertos gastos de desplazamientos de la esposa del jefe del Ministerio Público, con base en normas reglamentarias.

Para la Sección Primera, la negativa de la demandada a suministrar datos sobre la financiación de la estadía de la señora Beatriz Hernández en algunas visitas oficiales de la entidad no se ajusta a los parámetros del artículo 74 de la Constitución, que protege el derecho de acceso de los ciudadanos a documentos públicos, en tanto que la reserva del Ministerio Público se basaba en normas reglamentarias, como los artículos 2.13, 5º y 6º del Decreto 4912 del 2011.

Para la corporación, dichos mandatos, relacionados con la reserva de datos sobre los adjudicatarios de esquemas de seguridad con cargo al Estado, no eran válidos para impedir que el abogado y columnista Ramiro Bejarano accediera a ellos con fines periodísticos.

Indicó que dado que el interés del peticionario no era conocer en detalle los aspectos íntimos de la vida familiar del Procurador y de su esposa, ni que se vislumbra en su requerimiento una afectación de su seguridad personal, en este caso, debe primar el derecho a la información, concluyó la Sala.

De ahí que ordenara a la accionada informar sobre los gastos de desplazamiento y de estadía de la señora Hernández, durante visitas a distintas poblaciones del país en las que la esposa del Procurador acompañó a la delegación del Ministerio Público en la entrega de regalos a comunidades vulnerables

(C. P. Jorge Octavio Ramírez). (Consejo de Estado Sección Primera, Sentencia 25000233700020150098601, 8/21/2015) Noticia generada en Ago. 24/15 (11:40 a.m.)

Revisión integral de los manuales de convivencia de las instituciones educativas en el país

Atendiendo el déficit de protección que enfrentan las víctimas de acoso escolar en el país, ante la falta de operatividad de la política pública de convivencia escolar, el Ministerio de Educación tendrá que implementar

en un plazo razonable mecanismos de detección temprana, acción oportuna, acompañamiento y seguimiento de casos de acoso escolar.

Particularmente se le ordena que en plazo establecido, se adopten las siguientes medidas: i) una revisión extensiva e integral de los Manuales de Convivencia en el país para determinar que los mismos sean posibles respetuosos de la orientación e identidad de género de los estudiantes y para que se incorporen nuevas formas y alternativas para humanos de los estudiantes, que permitan aprender del error, respetar la diversidad y dirimir conflictos de manera pacífica, así como que contribuyan a dar posibles soluciones a situaciones y conductas internas que atentan contra el ejercicio de sus derechos; y ii) ordenar y verificar que en todos los establecimientos de educación preescolar, básica y media estén constituidos los comités escolares de convivencia.

CORTE CONSTITUCIONAL- Bogotá, D.C., tres (3) de agosto de dos mil quince (2015)- Sentencia T-478

Jueves 27 de agosto de 2015

Norma del CGP que permite dar por notificados a quienes se niegan a aceptar la comunicación es exequible

La Corte Constitucional declaró exequible la disposición que permite que se dé por notificado a quien se niegue a recibir la comunicación mediante entrega en el lugar por parte de la empresa postal, con constancia de que el destinatario se rehusó a ser notificado (numeral 4º del artículo 291 del Código General del Proceso, Ley 1264 de 2012).

La Sala estableció que se trata de un mandato distinto a aquel que impone que se produzca emplazamiento, a petición de la parte, si la notificación es devuelta por la inexistencia de la dirección destino.

No se viola el principio de igualdad, dice, porque se evidencia que se trata de uno de los casos en los cuales el legislador está facultado para establecer consecuencias jurídicas distintas, por enfrentarse a situaciones de hecho que no son iguales

(M. P. Mauricio González). (Corte Constitucional, Comunicado Sentencia C-533 (D-10702), 8/19/2015) Noticia generada en Ago. 25/15 (2:30 p.m.)

Proyecto de decreto reglamenta contratación del servicio público educativo por entidades territoriales certificadas

“Artículo 2.3.1.3.1.1. Objeto. Establecer los criterios y procedimientos para la contratación del servicio público educativo por parte de las entidades territoriales certificadas en educación que demuestren insuficiencia o limitaciones en los establecimientos educativos oficiales de su jurisdicción para la prestación del servicio educativo”.

MinEducacion-ProyectoDecreto-2015-N0005779 2015/08/27. Enviar comentario al correo jvalencia@mineducacion.gov.co

Contar con licencia de construcción no exonera de responsabilidad por daño ambiental

Aunque un municipio haya otorgado a un particular una licencia ilegal para la construcción de un proyecto en un terreno protegido por el plan de ordenamiento territorial, esto no lo exime de la responsabilidad derivada del daño ambiental causado, advirtió la Sección Primera del Consejo de Estado.

Al respecto, el alto tribunal reiteró que el Estado debe imponer cargas y limitaciones a la propiedad privada, con el fin de garantizar el interés público.

Por estas razones, la corporación estableció que una persona violó el derecho colectivo a un ambiente sano, pues inició la construcción de una urbanización sobre un humedal y una quebrada del municipio de Salento (Quindío) y así perturbó el ecosistema del sector. Si bien el municipio expidió la licencia de construcción, lo hizo sin sustento legal y esto invalida tal autorización, añadió la providencia

(C. P. Guillermo Vargas). (Consejo de Estado Sección Primera, Sentencia 63001233100020120003201, 5/28/2015) Noticia generada en Ago. 26/15 (8:17 a.m.)

Los problemas no resueltos en las sentencias de unificación limitan la extensión de jurisprudencia

Cuando en la solicitud de extensión de la jurisprudencia se presenta un problema jurídico que no fue resuelto dentro de la sentencia de

unificación, se rompe la identidad jurídica y en consecuencia se torna improcedente la solicitud, pues si se resolviera de fondo la controversia adicional se desbordaría el alcance de este mecanismo al incluir un análisis de legalidad de un acto administrativo o actuación, vulnerando de esta forma los derechos del debido proceso, contradicción y defensa de la contraparte.

Niega. M.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Documento disponible al público en agosto de 2015. Temas: Extensión. Unificación. Controversia. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Expediente 11001 03 25 000 2012 00807 00 (2581 2012) de 2015

Así se calcula lucro cesante ante falta de certeza de ingreso que deja de percibirse por el daño

El Consejo de Estado indicó que cuando no se tiene certeza sobre el beneficio que genera determinada actividad económica, en el propósito de definir la reparación de daño por lucro cesante, se debe interpretar que la víctima directa tenía un ingreso mensual promedio equivalente a un salario mínimo.

Lo anterior, dice la providencia, en aplicación de los principios de reparación integral y equidad que integran el artículo 16 de la Ley 446 de 1998. Adicionalmente, recordó que pese a la autonomía con la que le es valedero actuar a las partes en acuerdos conciliatorios, estos se encuentran limitados a la protección de los intereses de ambos enfrentados; por un lado, debe garantizar que se no afecte la reparación integral y el derecho de daño para la víctima y, desde la óptica de la administración, el acuerdo es valedero siempre que no lesione el patrimonio público

(C. P. Jaime Orlando Santofimio). (Consejo de Estado Sección Tercera, Auto 54001233100020080037001 (48330), 08/26/2015) Noticia generada en Ago. 26/15 (11:16 a.m.)

Requisitos de procedibilidad para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho el Código Contencioso Administrativo en concordancia con la Ley 1285

de 2009 y su Decreto Reglamentario el Decreto 1716 de 2009 ordenaron que debían acreditarse los siguientes requisitos:

(i) agotar la vía gubernativa (artículos 135 y 138 del C.C.A.) (ii) solicitar de manera previa a la presentación de la demanda la conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación en cumplimiento del artículo 28 de la Ley 1285 de 2009 y el mencionado decreto reglamentario, y (iii) presentar la demanda dentro de un término especial dispuesto en el numeral dos del artículo 136 del C.C.A. que es de cuatro (4) meses contados a partir de la notificación del acto.

Consejo de Estado SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA Actor: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.
Demandado: Secretaria Distrital de Ambiente Consejero ponente:
GUILLERMO VARGAS AYALA Bogotá, D.C., veintiuno (21) de mayo de
dos mil quince (2015) Rad. Núm.: 25000 2324 000 2010 00024 01

Reiteran que entes territoriales están facultados para determinar los elementos del impuesto de alumbrado público

La Sección Cuarta del Consejo de Estado recordó que la normativa constitucional otorga a las asambleas departamentales y concejos municipales autonomía tributaria, en virtud de la cual pueden definir directamente los elementos esenciales de los tributos del orden departamental, distrital y municipal autorizados por el legislador, atendiendo los parámetros fijados, en los casos en que así lo haya hecho.

Tratándose del impuesto de alumbrado público, el alto tribunal resaltó que, inicialmente, la Ley 97 de 1913 autorizó al Concejo de Bogotá para crear, entre otros, el impuesto sobre el servicio de alumbrado público y para “organizar su cobro y darles el destino que juzgue más conveniente para atender a los servicios municipales, sin necesidad de previa autorización de la Asamblea Departamental”.

Estas atribuciones, indicó, fueron extendidas a los demás municipios mediante la Ley 84 de 1915, razón por la cual se predica que los entes territoriales tienen la facultad para adoptar el impuesto de alumbrado público en su jurisdicción y determinar los elementos esenciales

(C.P. Martha Teresa Briceño). (Consejo de Estado Sección Cuarta, Sentencia 20001233100020110049101 (20102), 8/6/2015) Noticia generada en Ago. 26/15 (9:24 a.m.)

Así operará Runt para acceder a exclusión de IVA en adquisición de vehículos de transporte público por reposición

El Ministerio de Transporte ordenó a la concesión Runt diseñar, desarrollar y poner en operación la funcionalidad requerida para que las personas que cumplan con los requisitos dispuestos en el Decreto 248 del 2015, el cual regula el procedimiento para acceder a la exclusión de IVA en la adquisición de vehículos de transporte público por reposición, puedan postularse y realizar los procesos de validación a través de la plataforma y expedir el CREI para acceder al beneficio contemplado en el numeral 11 del artículo 424 del Estatuto Tributario.

Para tal efecto, el sistema deberá generar los desarrollos, procesos de validación y canales de comunicación con la Dian y demás entidades respectivas.

De manera específica, el sistema adelantará las validaciones teniendo en cuenta lo siguiente: que para la cantidad de vehículos de propiedad del beneficiario no se tendrán en cuenta la propiedad sobre automóviles de servicio particular ni de transporte público de carga y mixto; cuando un vehículo tenga varios dueños, se entenderá que cada propietario tiene la misma participación en la propiedad del carro; entre otros.

Para llevar a cabo la cancelación de la matrícula con el fin de acceder al beneficio, el propietario deberá dar cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Capítulo V de la Resolución 12379 del 2012. (Mintransporte, Resolución 2901, 8/20/2015) Noticia generada en Ago. 26/15 (9:33 a.m.)

Función Pública y Andje expiden circular sobre subcomités sectoriales de defensa jurídica del Estado

El Departamento Administrativo de la Función Pública y la Agencia Nacional del Defensa Jurídica del Estado (Andje) emitieron la Circular Conjunta 01 del 2015, en la que se establece la conformación de los subcomités sectoriales de defensa jurídica del Estado, instancia que le permitirá a las entidades públicas que hacen parte del sector administrativo identificar las problemáticas comunes en la gestión del ciclo de defensa jurídica.

Según las entidades, la creación de los subcomités busca mejorar la coordinación interinstitucional y serán los ministerios y departamentos administrativos los encargados de crear los subcomités sectoriales de defensa jurídica del Estado, los cuales harán parte de los comités sectoriales de desarrollo administrativo.

Esta instancia le permitirá a las entidades públicas identificar las problemáticas comunes, estudiarlas y abordarlas en forma agregadas a nivel sectorial. Así mismo, la norma estipula las funciones, la integración de los comités y la secretaría técnica.

En cuanto al plazo de creación, se establece que las entidades cabeza del sector administrativo contarán con un plazo de 45 días calendario contados a partir de la fecha en que reciben la circular para su conformación. (Departamento Administrativo de la Función Pública, Circular conjunta 01, 8/24/2015) Noticia generada en Ago. 26/15 (3:39 p.m.)

Antes de la Ley 1150 del 2007, entidades debían acudir a aseguradora por siniestros que no se originaran en caducidad de contrato

El Consejo de Estado explicó que, en aplicación de la Ley 80 de 1993 y del Decreto 679 de 1994, antes de la Ley 1150 del 2007 solo era constitutivo de siniestro el acto administrativo por medio del cual se declaraba la caducidad del contrato.

Lo anterior porque así lo establece el artículo 18 del Estatuto de Contratación Estatal (Ley 80 de 1993), al referirse a la declaratoria de caducidad como una fórmula para terminar el contrato por incumplimiento grave.

Añadió la Sala que la declaratoria de siniestro en circunstancias distintas a la citada de caducidad tiene un valor meramente declarativo, que sería equivalente a la reclamación ante el asegurador, para que se haga efectiva la garantía frente a la ocurrencia del riesgo cubierto, en este caso el siniestro, en los términos del artículo 1072 del Código de Comercio

(C. P. Hernán Andrade). (Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 250002326000199900405 (32301), 7/16/2015) Noticia generada en Ago. 26/15 (8:12 a.m.)

No hay acción para conseguir el pago de obras realizadas en terrenos ajenos

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia precisó que quien edifica en un terreno ajeno no cuenta con una acción legal específica para conseguir el pago de las mejoras o para obligar al propietario a comprar lo construido.

Según el alto tribunal, del artículo 739 del Código Civil se desprende una abstención del legislador en este sentido, por cuanto las prerrogativas que ofrece la norma son solo para el titular del dominio del suelo.

En efecto, dentro de los supuestos que refiere la norma se destacan las opciones con las que cuenta el propietario cuando un tercero edificó, plantó o sembró sin su consentimiento, o bien cuando el mejoramiento del predio se realizó a “ciencia y paciencia” del propietario de la tierra

(M.P. Álvaro Fernando García). (Corte Suprema de Justicia Sala Civil, Sentencia SC-10896 (63001311000420050001101), 8/19/2015)
Noticia generada en Ago. 26/15 (10:28 a.m.)

Realizó: Claudia Salas Martínez
Profesional Universitario – Dirección Jurídica
Procedimiento Difusión de Información Jurídica
Alcaldía de Santiago de Cali
Teléfono oficina - 57-2 8896744
WhatsApp: 3117704301
Claudia.salas@cali.gov.co